

TRANSFORMACIONES SOCIALES Y CAMPO POPULAR EN URUGUAY: CONSTRUCCIÓN DE ALTERNATIVAS Y ESCENARIOS POSIBLES.

Por Alfredo Falero y Angel Vera

Un capítulo del libro "Uruguay Hoy. Paisaje después del 31 de octubre", una compilación de Oscar Brando editada en noviembre de 2004

1. ESTRUCTURACIÓN SISTÉMICA GLOBAL

Pensar escenarios posibles en el mediano plazo para la sociedad uruguaya requiere un ángulo de observación que implique pero a la vez trascienda lo que ocurre dentro de sus límites como Estado-Nación y que además integre la actual coyuntura en una secuencia histórica mayor. Esto significa que lo que se vive como presente es el producto de praxis anteriores de distintos actores pero a la vez puede constituir un momento de apertura de un campo de potencialidad de prácticas sociales futuras y por tanto de nuevos horizontes de posibilidades.

Tales iniciales consideraciones de tiempo y espacio pretenden tener presente algunas conexiones conceptuales necesarias: las particularidades que hacen a la construcción sociohistórica del Uruguay no se pueden entender como una historia de determinación "nacional" sino como parte de la configuración específica que asume en América Latina el capitalismo global.

Lo anterior, a la vez, requiere desbloquear ángulos de conocimiento que permanecen sepultados bajo formas de razonar que se acotan al análisis de "lo posible". Dar cuenta de la realidad social, exige la reconstrucción de una perspectiva crítica de las ciencias sociales y consecuentemente la superación de un razonamiento excesivamente pragmático y de corto plazo que terminan mutilando la realidad.

Acordar en estas líneas conceptuales de tono general, permite pensar la sociedad uruguaya del futuro sin caer en algunas ilusiones fáciles de percepción de desarrollo posible y al mismo tiempo abrirse a la posibilidad de transformación de los actores sociales (grupos o clases) en el marco de nuevos contextos. En tanto esto último constituye el objetivo central de este artículo, se realizarán previamente algunos señalamientos previos sobre el primer punto mencionado.

En este sentido, una premisa de tono general es que las posibilidades de desarrollo en el Uruguay, como en el resto de los países latinoamericanos, están atadas a la identificación de trayectos potenciales de construcción de alternativas sociales al capitalismo. Esta idea de "construcción" es la que transmite la expresión "estructuración" del título, puesto que no existen ni para los individuos ni para los colectivos, límites externos a ellos de carácter fijo, o dados de una vez y para siempre. Las estructuras económicas, sociales, políticas suponen límites a la acción, pero éstos se desplazan, se reacomodan, siempre están en tensión dependiendo de las prácticas sociales.

A partir del este planteamiento general, deben considerarse un conjunto de premisas básicas que permiten focalizar en la idea de obstáculos y aperturas globales en la construcción de lo nuevo. Abundante es la acumulación de conocimientos disponible que avala lo que sintéticamente puede presentarse del siguiente modo:

- a) Existe una polaridad intrínseca al capitalismo que se expresa social y geográficamente y que supone la perpetuación de una lógica de regiones centrales y regiones periféricas por la cual las últimas ostentan una condición de subalternidad que es necesaria para la existencia y mantenimiento de las primeras. La revolución informacional actual, no anula sino que se inscribe en esa reproducción polar.
- b) Las sociedades latinoamericanas, con distintas variantes, se constituyeron

sociohistóricamente como sociedades periféricas si bien algunas de ellas, en algunos períodos, alcanzaron algunos grados de autonomía de la acumulación global o lo que es lo mismo, lograron matizar sus consecuencias más duras. Este es el caso de las sociedades del cono sur incluyendo Uruguay en algunos períodos del siglo XX. La deuda externa debe verse como parte de flujos asimétricos más amplios (que incluyen también remisión de beneficios por las transnacionales por ejemplo) y que conectan la región en lo que suele llamarse globalización.

c) Dada la actual fase de creciente interconexión y dominio geográfico del capital que implica la conformación de bloques regionales, las alternativas sociohistóricas ya no admiten ser pensadas como desarrollo nacional autónomo, incluso para países como Brasil, sino en función de contribución a un proyecto regional de transformación social y paralelamente, como ya se aludió, de corrimiento de límites sistémicos globales.

d) En consecuencia, lejos de un recurso puramente axiológico del “deber ser”, las evidencias disponibles replantean la integración latinoamericana dentro de otros horizontes y agregan una nueva agenda a los movimientos sociales. La situación geopolítica particular de América Latina en su relación con Estados Unidos que por el momento presenta una debilitada capacidad de arrastre regional bajo un proyecto hegemónico como el ALCA, advierte de la apertura de posibilidades de otra construcción supranacional alternativa (que, por supuesto, no entra en la agenda del establishment).

2. UN ANGULO DE ANÁLISIS DE LA TRANSFORMACIÓN DE LA SOCIEDAD URUGUAYA

Las campañas electorales reavivan la tendencia a mostrar espejos de lo que la sociedad puede llegar a ser. En el caso de Uruguay a menudo se recurre a invocar el “modelo” de desarrollo^[1] de países como Irlanda o Finlandia. Obviamente esto no es más que la apelación a una vieja ilusión eurocéntrica ya que no es posible repetir condiciones de otros contextos sociohistóricos donde se generaron otras estructuras de poder. Esto ya fue señalado en la década del sesenta y completado en contribuciones más recientes a partir de autores como Amin, Arrighi, Frank y Wallerstein^[2] y se desprende de las premisas anteriores.

Por otra parte, una tendencia frecuente, aunque inevitable en el caso uruguayo, es que las características de lo que se proyecta como posible, nunca deja de estar mediado por la memoria histórica de mecanismos estatales generados para matizar grandes desigualdades. Deberá observarse en este sentido que como toda memoria histórica, no se trata solamente de idealizaciones posteriores -que existen- sino del producto de un proceso histórico real. Ambos aspectos están en tensión en el imaginario social.

De hecho, el propio perfil de frecuentes análisis políticos sobre Uruguay, parece concurrir, sin explicitarlo, en la dirección de caracterizar la construcción durante parte del siglo XX -hasta la dictadura- de un presunto capitalismo feliz “a la uruguaya”. Sin negar la pertinencia de dimensiones que frecuentemente se explotan para fundamentar esta postura -por ejemplo, la movilidad social y las posibilidades de lograr un mejor posicionamiento socioeconómico- es posible derivar de aquí, el camino de reconstrucción de ese estado benefactor mítico, aproximado al modelo europeo, que nuevamente coloque a Uruguay en la senda de un desarrollo social que lo diferencie de una América Latina profundamente desigual^[3].

De acuerdo con las premisas establecidas anteriormente, dentro de los actuales límites sistémicos, esto es muy difícil. Desde el punto de vista histórico las especificidades del caso uruguayo pueden tener otro ángulo de lectura donde la clave explicativa no recaiga en el mito y por tanto la búsqueda de lo nuevo no quede atrapada en el mismo. Esto es: las particularidades uruguayas bien pueden buscarse en la conformación de

un proyecto con relativa autonomía de los grupos económicos, que comparativamente pudo regular más que otros países de la región el capital transnacional y que introdujo canales institucionales para las demandas provenientes del mundo del trabajo. Uruguay y Chile fueron las dos experiencias latinoamericanas que más se acercaron a la constitución de un “mercado interno” antes de las dictaduras de los setenta. Por otra parte, lejos de visualizar concesiones graciosas de determinados gobiernos, la configuración de canales estatales de demandas también fue el producto de las tempranas manifestaciones de un movimiento de trabajadores basado originariamente en ideas anarquistas y socialistas actualizadas para la época. Los sindicatos –agentes importantes de socialización de las ideas de cambio social- se fueron fortaleciendo y asentando sobre el trabajo formal especialmente industrial, que el modelo de acumulación vigente habilitaba.

Ciertamente, se trató de una construcción social que no estuvo exenta de la reproducción de desigualdades ni de importantes conflictos laborales. Sin embargo, matizadas sus consecuencias por la intervención del Estado en un contexto de tejido social integrado y pequeño país, habilitó a calificar la sociedad uruguaya con esa a menudo mal invocada fórmula de sociedad “amortiguadora de conflictos”[\[4\]](#). Como es ampliamente conocido, el modelo de acumulación entró en crisis a fines de la década del cincuenta aunque se expresó claramente en la década del sesenta. De hecho, el giro autoritario que instauró el Partido Colorado a fines de los sesenta no puede separarse de esta crisis estructural como de las alternativas globales de cambio social[\[5\]](#). En la mutación de estructuras de poder que implica ese giro, es ostensible el estrechamiento de lazos entre poder económico y poder político (Real de Azúa, 1971). El nuevo modelo de acumulación regional, designado frecuentemente con el eufemismo de “nuevo modelo exportador”, llevó a consolidar el relacionamiento asimétrico con los centros hegemónicos. Las dictaduras fueron funcionales en ese primer período para construir el orden social que habilitara el nuevo patrón de poder. El formato autoritario generó las bases de la desregulación económica que se profundizaría en los regímenes posdictatoriales dentro de una geocultura[\[6\]](#) y una estrategia global “neoliberal”.

Este, sin embargo, más temprano o más tarde, debía encontrar límites en un arco de movimientos sociales que tanto aquí como en el resto de América Latina incluía fuertes demandas en primer lugar de apertura democrática[\[7\]](#). El empuje del modelo encontraría mayor eficacia bajo la legitimidad de un formato democrático liberal con enclaves autoritarios.

En consecuencia, no puede sostenerse que se trata meramente de una sucesión de gobiernos postdictadura promotores de ajustes fiscales regresivos o de concreción local de ideas económicas neoliberales basadas en el consenso de Washington. Se trata, debe subrayarse, más que eso: es la consolidación de un patrón de poder regional y global[\[8\]](#), una reformulación que, entre otras cosas, anula la pasada relativa autonomía del Estado con las elites económicas (no sólo locales).

Para ello se requirió asimismo, la transformación de la forma Estado con el fortalecimiento del poder Ejecutivo (de Sierra y Longhi, 1987; de Sierra, 1992), la preeminencia del mismo sobre el poder Legislativo y el Judicial, la búsqueda de legitimación tecnocrática de las políticas públicas y el disciplinamiento de las estructuras partidarias tradicionales a sus elites.

Paralelamente se asiste a una segmentación sin precedentes de los sectores asalariados. En tal sentido puede pensarse en la diversidad de trayectorias sociales de los desempleados, particularmente quienes sufrieron la desindustrialización (se estima un 5 % de reducción del empleo industrial entre 1991 y 1998; Olesker, 2001). El

proceso de precarización laboral supone para toda América Latina la expansión del trabajo por cuenta propia, el aumento del subcontratismo y nuevas condiciones contractuales de dependencia. En el caso uruguayo, para el año 2002, más del 50 % de los trabajadores del sector privado se encontraban en situación de precariedad laboral[9] con lo que esto, puede suponerse, significa en términos de pérdida de soportes laborales históricos: certidumbre, previsibilidad y fijación concertada de condiciones laborales. Todo esto puede ser leído como la introducción de lógicas de fractura en la cooperación laboral y la solidaridad social.

Esto sugiere la desestructuración de la clase trabajadora conocida y de los vínculos entre el viejo estado batllista y las organizaciones sindicales y populares. La nueva clase social presenta una base mucho más heterogénea que antes y el carácter territorial adquiere una significación mayor dada la creciente polarización social. Las clases sociales en el Uruguay de hoy aparecen con límites espaciales más definidos. La crisis económica y su manifestación financiera, la dramática situación social que estalló en toda su magnitud en el año 2002[10], marca el fin de un proceso y el inicio de una zona de bifurcación con distintos proyectos posibles. La deslegitimación regional de lo que simplifícadamente denominamos neoliberalismo, sugiere una coyuntura de mutaciones y permanencias cuyas consecuencias se verán por varios años. En este contexto, es preciso analizar las limitaciones y potencialidades que se le presentan a los actores políticos y de la sociedad civil que promueven la construcción de un horizonte alternativo.

3. ¿UN NUEVO MODELO DE DESARROLLO? UN ANGULO DE ANÁLISIS REGIONAL

En Uruguay como en el resto de los países latinoamericanos, integración regional y desarrollo pasan a ser conceptos claves y relacionales, pero, como es natural, se cargan de diversos significados según quien lo postule. Si algo es seguro es que, pese a la miopía de tecnócratas, ambas cosas no aluden simplemente de la identificación de medidas “técnicas” apropiadas o de la graduación de un instrumento, llámese volumen del gasto público, suba o baja de aranceles, etc. Se trata de identificar actores sociales capaces de sustentar un proyecto.

En este sentido no es casual una renovada búsqueda de la “burguesía nacional”[11] como actor central para lograr el desarrollo. Nuevamente no estamos frente a una exclusividad política de Uruguay. Por otra parte, el espíritu de un Max Weber empobrecido[12] se hace presente en América Latina cuando se piensa en un proyecto que descansa sobre la búsqueda de empresarios con ética. Colaboran en la construcción de esta visión, organismos internacionales como el BID que recurrentemente vienen insistiendo en la ética empresarial y otros componentes conexos como la “responsabilidad social empresarial” (refiriéndose a su responsabilidad frente a los trabajadores y al entorno).

¿Puede ser ésta la base socioeconómica de un proyecto estratégico para toda la región?. Sin dudas, existen algunas evidencias de cambios en las actitudes de parte del empresariado. Por ejemplo, es llamativo que un grupo de poderosos empresarios latinoamericanos –comenzando por Carlos Slim, el mayor multimillonario de América Latina según Forbes[13]- tiendan a reconocer límites al patrón actual y ponderen más decididamente que antes la importancia de un consumo interno más socialmente abarcador en nuestras sociedades (considerando naturalmente su propio beneficio). Por otra parte, a menudo se suele advertir una diferencia importante del proceso brasileño y su empresariado al que se coloca como referente (en especial los análisis suelen basarse en la burguesía paulista, aliada coyuntural del PT) con lo ocurrido en Argentina y Uruguay. Cabe aquí matizar una postura de visualización de grandes

diferencias. En primer lugar, la lectura de permanencia –pos noventa- de un estado desarrollista fuerte en Brasil no es correcta. El sociólogo Francisco de Oliveira señalaba que el PT no había diagnosticado correctamente para su país lo que había significado la era Fernando Henrique Cardoso, marcada por el uso violento del Estado para promover un nuevo proceso de acumulación privado. La estructura de propiedad y las relaciones de clase fueron intensamente afectadas por las privatizaciones[14]. En el caso uruguayo el grado de extranjerización de la industria, comercio, finanzas y servicios en Uruguay se sabe que es alto, aunque proporcionalmente menor que en Argentina, donde además de las privatizaciones existieron ventas generalizadas de paquetes accionarios de los grupos económicos locales en la década del noventa (Sevares, 2002).

En Uruguay, se ha observado una creciente participación del capital extranjero en la cúpula de las mayores empresas del país. De las 300 mayores en 1990 mientras el 28.3 % tenía esa condición, en 1998 había subido al 42.7 % (Bittencourt y Domingo, 2001). En tanto muchos industriales dinámicos fueron expulsados del sistema por las políticas aplicadas en la década del noventa, la idea de un posible regreso a la situación anterior con un empresariado “nacional” fuerte puede ser tentadora. Sin embargo, la sustentación de la centralidad del nuevo camino regional sobre la base de un empresariado “ético” comprometido con un nuevo proyecto, no parece disponer de más evidencias que las de algunas suposiciones políticas. Al igual que la visión subyacente en un buen núcleo de aspiraciones sociales basadas en el regreso a un mítico “Uruguay feliz” de los cincuenta, algunas expectativas políticas pueden trasmutarse en guía ilusoria.

Toda salida efectiva del llamado “neoliberalismo” requiere un nuevo modelo de acumulación. Y un nuevo modelo de acumulación supone en primer lugar un estado con la capacidad de promover otras articulaciones, alianzas o constelaciones de clase diferentes a las actuales. Pero también se requieren actores en el terreno de la sociedad civil capaces de impulsar alternativas. Y este es -al igual que el terreno del Estado y del sistema político- también un espacio social de disputa hegemónica como veremos inmediatamente.

4. MORFOLOGÍA DE LA SOCIEDAD CIVIL: HEGEMONÍA Y CAMPO POPULAR

La agenda de las ciencias sociales se ha comenzado a nutrir del concepto de “capital social” como componente clave del desarrollo. De hecho se ha convertido en un extraordinario recurso que permite a muchos sociólogos y politólogos volver a “dialogar” con los economistas[15]. El concepto aparece notoriamente influenciado por la tradición sociológica norteamericana a través de Coleman y principalmente Putnam (1993) y no por la francesa especialmente a partir de Bourdieu y su conexión con la reproducción de la desigualdad social. En el sentido habitualmente utilizado trata de conciliar la acción racional con las relaciones sociales que pueden potenciar o reducir a aquella. Se concede particular importancia entonces a valores como la confianza y a redes sociales sustentadas en el voluntariado.

De esta forma, se apoya la visión que el éxito económico depende del capital social acumulado por asociaciones que privilegian redes horizontales. Para quienes siguen este enfoque, todos los procesos participativos pasan a quedar incluidos en la categoría de Capital Social, desde una red de vecinos hasta experiencias como el presupuesto participativo de Porto Alegre. El desarrollo aparecerá dependiendo fundamentalmente de que existan y se regeneren esos lazos sociales, quedando fuera de la discusión otras dimensiones centrales para los países periféricos: capacidad del Estado, mercantilización y desmercantilización de relaciones sociales, clases y actores para un proyecto alternativo, fuerzas productivas potencialmente desencadenables y su

gestión, etc.

Desde el punto de vista de la realidad social, la temática lleva a identificar dos direcciones distintas que coexisten y que suponen horizontes históricos bien diferenciados. Por una parte, está la búsqueda de construcción de una subjetividad social alternativa a través de la generación de espacios sociales capaces de abrirse a lo nuevo. Por otro lado podemos encontrar un abanico de acciones (individuales o colectivas) particularmente sustentadas sobre la base de ong's, que se enmarcan y se encaminan en la línea de una renovada visión del voluntariado que llenan los espacios que el Estado va dejando.

En la primera dirección, las redes basadas en la resignificación de necesidades y la construcción de derechos sociales a través de la experiencia que proporciona integrarse a movimientos sociales (Thompson, 1981; Sader, 1995) pueden llegar a constituir bases de sujetos colectivos y en consecuencia de una sociedad más participativa y democrática. Todo lo referido a este ámbito que designamos como campo popular, será motivo de atención particular. En la segunda dirección, -aún configuradas desinteresadamente- las acciones no constituyen una alternativa al modelo hegemónico que sigue estructurando las relaciones sociales, sino que simplemente toman el lugar de las funciones de compensación de situaciones de vulnerabilidad social que el Estado realizaba.

Más allá de la diversidad que engloba cada uno de estos formatos, la temática conduce al plano de la hegemonía y esto sugiere resumidamente -en clave gramsciana- una arena en donde se juega la construcción de subjetividades sociales y los proyectos de sociedad (Falero, 2003 b). Esto está presente en la construcción de redes barriales donde se observa una fuerte heterogeneidad.

Allí participan "organizaciones no gubernamentales" que han venido proliferando en los últimos años, de múltiples características dada la laxitud del propio concepto. Un relevamiento del Instituto de Cooperación y Desarrollo (ICD) señalaba que unas 261 organizaciones sobre las que se disponía información, involucraban unas 11.000 personas que trabajaban en forma rentada o voluntaria y cuya actividad beneficiaba - declaraban las organizaciones- directamente a casi 600.000 personas incluyendo vecinos de distintos barrios, decisores, empresarios, sindicalistas, etc[16]. Más allá de la exactitud de la cifra, debería considerarse entonces que buena parte del tejido social está cruzado por estas prácticas.

No es nueva la construcción de redes barriales en Montevideo, sí lo es aumento de su magnitud y la incidencia de las ong's en las mismas. De hecho la generación de un dinamismo sin precedentes en barrios periféricos (como respuesta a una crisis agravada en el 2002) solo es posible como resultado de prácticas sociales anteriores. En este sentido, el florecimiento de huertas comunitarias, comedores populares, nodos de redes de trueque, comisiones de vecinos, pueden considerarse expresiones y a la vez posibilidades de un cambio en la subjetividad social.

Además se han ido conformando redes que vinculan y organizan los lugares donde se sirven comidas gratuitamente en barrios populares y que, en suma, constituyen un arco no siempre visible de manifestaciones colectivas pero con un papel clave para la construcción de un movimiento (Tarrow, 1994). Un arco de experiencias que incluye no solamente a Montevideo sino a todo el país -especialmente en cuanto a huertas comunitarias- lo cual es bastante novedoso.

Ciertamente no está ausente en esta dinámica -al igual que en el caso de movimientos sociales constituidos- la influencia de la sociedad política, en el sentido que muchos organizadores sociales actúan paralelamente a un nivel de base o medio en fuerzas políticas. No puede ser de otra manera. Por ello y también por todo lo anterior, la

sociedad civil se convierte en campo de disputa por la hegemonía de lo alternativo frente a prácticas clientelistas tradicionales.

Un actor clave de la sociedad, a pesar de las metamorfosis del mundo del trabajo (Antunes, 1999) continúa siendo el movimiento sindical. La constelación de variables que influye en su posicionamiento y accionar -recursos materiales y simbólicos, trayectoria histórica, arraigo social y capacidad de construcción de un activismo de base, etc.) excede un detenimiento mínimo, no obstante corresponde al menos un balance y una proyección para el caso uruguayo.

Si se considera la magnitud de la crisis del 2002 y la deslegitimación del gobierno, percibido por ejemplo en el paro general del 17 de junio del 2003, se observó un accionar prudente en función de un posible escenario con triunfo electoral del Frente Amplio. Con relación a los conflictos, en el año 2002 el de los bancarios, (AEBU) fue probablemente muy relevante. No obstante, el de salud pública, ocurrido en el segundo semestre 2003, fue uno de los más importantes de los últimos años. Es importante marcar que contó con el respaldo de buena parte de la sociedad y fue llevado adelante por nuevos dirigentes de la Federación de funcionarios de salud pública (FFSP)[\[17\]](#). Otro eje importante a señalar de los últimos tiempos es que la central sindical intentó la construcción de la “Concertación para el Crecimiento” con sectores del capital y que tuvo una primera gran convocatoria pública (se estimó unas cien mil personas) el 16 de abril del 2002 en el Obelisco. La heterogeneidad de actores vinculados al trabajo y el capital que congregó, no disimuló, sin embargo, ausencias notorias como las del movimiento cooperativo de viviendas por ayuda mutua (FUCVAM) en el primer caso. Menos sorprendente en el segundo caso, fue la ausencia de la Cámara de Comercio y la Cámara de Industria -que como es esperable, tienen una capacidad de lobby muy desarrollada- mientras que organizaciones como la Federación Rural y la Asociación Nacional de Micro y Pequeños Empresarios (ANMYPE) apoyaron la plataforma y concurrieron al acto en cuestión.

Más allá de otros actos públicos posteriores, esta propuesta de bloque alternativo perdió dinamismo. Dentro de las razones, no estuvieron ausentes las actividades de lobby de algunas asociaciones representativas del capital. Pero además, si se observa la relación con FUCVAM u otras organizaciones sociales, el PIT-CNT exhibe dificultades y contradicciones internas para constituirse en un vector de un arco alternativo más amplio de mayor potencialidad de demanda. Sus bases sociales no sólo han cambiado estructuralmente como ya se señaló, sino que por su propia evolución reciente como movimiento, su accionar tiende a apoyarse exclusivamente en las relaciones de fuerza existentes en su dirigencia

Respecto a FUCVAM, su presencia pública como movimiento ha sido notoria en diversas expresiones colectivas desde la salida de la dictadura. Ha participado activamente contra las privatizaciones y ha marcado, en suma, un abanico de temas de preocupación que exceden al que hace a su objetivo central de la vivienda. Por ejemplo, desarrolla una amplia diversidad de actividades que incluyen cooperativas de distinto tipo (producción, consumo), policlínicas, grupos de estudio, grupos de teatro y otras expresiones.

La relación con sus bases sociales -las cooperativas de vivienda- se percibe como más dinámica que en el caso del movimiento sindical y con una moderada tendencia a problematizar internamente esa conexión. Tiene además a su favor un sistema de solución habitacional relativamente exitoso que ha llamado la atención en el exterior. Su accionar actual sugiere una estrategia de construcción de un arco alternativo con otras organizaciones populares. Sin embargo, su perspectiva de ampliación como movimiento depende de generar una voluntad política de construcción de vivienda por

este sistema, algo ostensiblemente bloqueado por la derecha política. Otro movimiento históricamente importante, aunque de menor proyección en los últimos años, es el caso de los estudiantes. En 1996 resurge un movimiento estudiantil en Enseñanza Secundaria, pero se ha caracterizado por su discontinuidad. Se recordarán las movilizaciones anuales que incluyeron la ocupación de centros educativos y sus expresiones públicas y planteamientos que expresan, como es sociológicamente previsible, mucho más que insatisfacciones educativas puntuales. Ocupa un lugar importante de sus preocupaciones la recreación de sus redes de apoyo, la conformación de una organización más bien laxa preocupada por la horizontalidad y la construcción de consensos internos.

Contrariamente, la FEUU (Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay) ha perdido el carácter de movimiento y su presencia pública resulta más bien modesta y atada a la discusión de presupuestos universitarios, más allá de algunas renovadas prácticas de acercamiento con la sociedad a través de “extensión universitaria”.

Otro vector que no puede dejar de mencionarse es el movimiento de Derechos Humanos. En verdad supone una diversidad de organizaciones con objetivos, alcances, estrategias y actividades propias, y la incidencia pública no puede buscarse estrictamente en cada una de ellas. La importancia está en haber colocado y seguir colocando en la agenda pública un tema nunca resuelto. Particularmente su mayor expresión colectiva, cada 20 de mayo, tiene efectos de construcción subjetiva que no pueden ponderarse bajo la óptica de buscar meramente consecuencias políticas inmediatas.

Cambiando la base territorial, no puede dejar de tenerse presente en esta rápida radiografía el desarrollo de movimientos locales de protesta en ciudades del interior del país desde la segunda mitad de la década del noventa. Entre las primeras manifestaciones, y la de mayor dinamismo posterior, está el caso de Paysandú. Aquí, a fines de mayo de 1997, una manifestación policlasista contra “el rumbo de la hambruna” y producto de la construcción de un consenso social inédito (“Paysandú Entre Todos” de 1996), se convirtió en un punto de partida de sucesivas movilizaciones. El que las ciudades del interior, cuyos ritmos políticos siempre habían sido pautados por los caudillos locales y relaciones clientelistas, adhieran a este tipo de movilización puede considerarse toda una novedad. No obstante la fragilidad de la sociedad civil sigue siendo evidente en este caso, y para fines del año 2003 la evaluación indicaba que los actores políticos habían sustituido a los movimientos sociales^[18].

Respecto a las movilizaciones agrarias, una fecha clave fue el 13 de abril de 1999, cuando decenas de miles de productores rurales lanzaron la mayor movilización hasta Montevideo en la historia reciente del país. La composición socioeconómica extremadamente heterogénea –que iba desde sectores rurales que se beneficiaron sistemáticamente hasta peones rurales- va más allá del estricto “campo popular”. Justamente de aquí debe considerarse que la inédita expresión pública de descontento no tuvo mayor proyección en la medida que algunas demandas de algunos integrantes con capacidad de lobby fueran atendidas. Esto efectivamente ocurrió y se consolidó con la reactivación de exportaciones posterior a la crisis del 2002.

Otras de las marchas que importa mencionar fue la de los “cañeros” de Bella Unión que en diciembre del 2000 recorrieron más de 600 kilómetros. La movilización reunió a un espectro amplio de “damnificados” (especialmente por el desmantelamiento de la producción azucarera) convocados por la “intersocial” de esa zona norteña del país. Más allá del significativo descontento social que acompaña estos hechos, todo indica que el divorcio entre Montevideo e interior también se observa en la imposibilidad de

consolidar bases sociales territoriales más amplias. Sin embargo esto no significa que no se puedan activar demandas en el futuro.

No es posible, dados los límites de este artículo, un repaso de otras expresiones de ese campo popular, por ejemplo las reivindicaciones de los jubilados en ONAJPU, las de las mujeres en distintas variantes, etc. En otro orden, no pueden desconocerse las versiones locales del Foro Social Mundial. Si bien tuvieron logros oscilantes entre la apertura convocante de lo nuevo y la extrema debilidad de lo ocurrido con el del año 2004, no dejan de constituir emprendimientos a tener en cuenta sobre todo en lo que significa el tejido de redes.

Así es que llegados aquí corresponde extraer dos conclusiones parciales. En primer lugar, se observa una heterogeneidad importante dentro del campo popular producto tanto de profundas transformaciones socioeconómicas como de mecanismos políticos fragmentadores (no exclusivos del Uruguay), lo que supone inevitablemente proyectar escenarios con varios actores y múltiples demandas postergadas.

En segundo lugar, a pesar de la salida individual, de la anomia o de la apatía al parecer solo sacudida en la coyuntura electoral, puede visualizarse un conjunto variado de expresiones colectivas que advierten de formas de resistencia social. Si bien éstas no pueden sobreestimarse en su potencialidad, tampoco pueden minimizarse comparándolas con otras realidades latinoamericanas. Además, el carácter acotado de tales expresiones, no puede ser separado del posicionamiento de diferir demandas en función de una expectativa, finalmente cristalizada, de un triunfo electoral del Frente Amplio.

Pero aún si todo el cuadro anterior de la sociedad civil puede ser relativizado, todavía no se ha mencionado un ingrediente central que ha configurado la especificidad uruguaya de resistencia social en la región: los plebiscitos. Si la estructura de la propiedad no fue tan radicalmente transformada como en Argentina, ello debe adjudicarse primeramente a esta forma de movilización social y a su resultado en las urnas. También es cierto que en otros casos, existieron derrotas como la que imposibilitó evitar los privilegios militares para evitar juicios por el período de la dictadura o a la que no pudo revertir la tendencia a la desregulación laboral cuando no se pudo levantar la reducción de 10 a 2 años en la prescripción de los créditos laborales.

Pero a nuestros efectos, deben extraerse de los plebiscitos otra serie de derivaciones. En este sentido, hay que establecer que éstos no partieron del Frente Amplio como tal, sino de sindicatos (aunque sí con el apoyo de parte de la izquierda) pero que en su construcción terminaron arrastrando a toda la fuerza política en una posición no originalmente buscada en función de otras previsiones electorales.

Adicionalmente, debe subrayarse la idea de “construcción” del plebiscito, en tanto en ese proceso se manifiesta la conexión y la vitalidad de las redes, particularmente a partir de algunos sindicatos. Estas conexiones entre organizaciones sociales diversas, activaron y sostuvieron la movilización para la recolección de firmas, que a su vez hizo posible que se habilitara el mecanismo. Es decir, que no se trata solo de la visualización de participación directa en la democracia a través de un acto puntual, sino que es preciso observar toda la compleja dinámica anterior que lo hace posible.

Finalmente, teniendo presente los medios de la derecha política para obstaculizar o restringir este proceso, tampoco debe subestimarse el carácter de tensión entre actores que significó.

En suma, más allá de la discontinuidad de expresiones, actores y demandas, más allá de la particularidad local de los plebiscitos que entre otras cosas permitió que el Uruguay se constituyera recientemente en el primer país en consagrar el acceso al

agua como derecho fundamental, la fortaleza o la debilidad de un campo popular no puede ser medido exclusivamente en sus efectos visibles inmediatos. Es preciso tener presente también la generación de experiencias sociales (Thompson, 1981), de una “cultura” de referencia alternativa a las relaciones dominantes, es decir esa contradictoria formación de un nuevo “sentido común” (Boaventura de Souza, 2000) o de una nueva subjetividad social y de la potencialidad de construcción de lo nuevo (León y Zemelman, 1997).

Llegados aquí se abre un abanico de interrogantes en función de la nueva coyuntura electoral. Hasta el momento un referente clave del campo popular fue el Frente Amplio en la oposición, acompañando la resistencia a la mercantilización dura de espacios sociales, pero ¿qué puede ocurrir de aquí en más? Para esquematizarlo, dígame que esto depende obviamente tanto de la dirección que tome la fuerza política dentro de los márgenes anotados al comienzo, como de la capacidad del campo popular de ponderar adecuadamente tal dirección. El siguiente capítulo intenta problematizar este aspecto.

5. LOS DILEMAS DE UN GOBIERNO FRENTEAMPLISTA

Como es conocido, el Frente Amplio y sus aliados acaban de ganar las elecciones nacionales por poco más del 50% de los votos válidos. Un resultado esperado. De hecho esta fuerza política ha venido sopesando seriamente esta posibilidad y una de sus preocupaciones básicas en los últimos años ha sido prepararse para ejercer el gobierno.

Uno de los aspectos más debatidos a su interna ha sido justamente tratado por la llamada “Comisión de Relacionamiento Fuerza política, gobierno, trabajadores y organizaciones sociales”. En uno de los documentos aprobados por el Congreso Héctor Rodríguez de diciembre de 2003 se afirma que el gobierno no se resume en la ejecución de un programa alternativo por un nuevo elenco político. El gobierno se sostiene sobre una estructura capaz de *“contemplar la participación y transferencia de la capacidad de decisión y gestión a la comunidad y a los trabajadores”*. Y agrega: *“Esto no se puede realizar hacia un sujeto fragmentado, sino que hay que promover permanentemente el desarrollo del sujeto social colectivo.”*^[19]

A partir de la constatación de la existencia del complejo entramado social que desarrollamos anteriormente y de organizaciones como el PIT-CNT y la FUCVAM, el Frente Amplio reivindica la celebración de un “Acuerdo Social” tal como resolvió el Congreso “Tota Quinteros” de setiembre de 2001:

“El gobierno progresista apoyado en el acuerdo entre todas las fuerzas que conforman la base social del Frente Amplio y en la necesidad de profundizar la democratización y el involucramiento de todos los sectores que apuestan al progreso y al crecimiento con justicia, ampliará la convocatoria al rico tejido social de organizaciones, asociaciones, gremios, sindicatos y cámaras comprometidas con el desarrollo soberano del país.”

La victoria electoral, ¿podría significar el comienzo de la realización del proyecto popular, nacional y democrático, antiimperialista y antioligárquico que diera origen al Frente Amplio? Su trayectoria estratégica, su praxis y su programa orbitan según la racionalidad capitalista. El concepto de “revolución” no figura en su agenda más allá que el Frente esté integrado por algunas organizaciones de vocación revolucionaria^[20]. Como se ha repetido innumerables veces el Frente Amplio se ha transformado fundamentalmente en un peculiar *catch all party* en detrimento de su estructura de base, notoriamente debilitada en su capacidad de iniciativa y de movilización de masas. Este modelo de partido tendrá efectos pertinentes en las relaciones entre la futura Administración Vázquez y el Frente Amplio, tal como señalan las mediaciones que ya se han impuesto y el alejamiento que instauran de hecho entre una y otra instancia.

A pesar de estas consideraciones, el triunfo electoral frenteamplista significa la extraordinaria apertura de una nueva coyuntura, un punto de articulación e indeterminación bajo las condiciones estructurales actuales pero con una nueva correlación de fuerzas. Desarrollamos primero una hipótesis de colaboración consensual simple entre gobierno y fuerzas sociales en torno a la realización del programa de cambios, para luego avanzar sobre algunas dificultades cruciales y por último, acercarnos a un escenario de adaptación.

La consecución de un programa democratizador, productivista, con énfasis en las políticas sociales y que impulse una nueva inserción regional y global, requiere sólidos apoyos sociales locales y nuevas articulaciones con el exterior. El empuje del protagonismo popular, en el sentido de conjunción de explotados, oprimidos y empobrecidos (Vilas, 1999), constituiría un avance sustantivo hacia la construcción de una alternativa social.

No escapa a este trabajo que la representación política y la consecuente integración de intereses de ese diverso arco de asociaciones y movimientos que se describió en el capítulo anterior es obviamente compleja. Sin embargo, el desarrollo de este potencial social y político es posible en la medida que exista una convergencia estratégica, un compromiso real entre las fuerzas sociales, la fuerza política y el gobierno, en base a un programa de reinserción internacional, resolución de la crisis fiscal y de redistribución de la riqueza. La realización de una “*guerra de posiciones*” en sentido gramsciano^[21] sería una construcción de largo aliento. Llevar el programa hasta sus últimas consecuencias, constituir el nuevo sujeto social, pasar a la ofensiva anti-neoliberal, significaría cuestionar lisa y llanamente la hegemonía del actual patrón de poder.

Esto constituye el esbozo *ideal*, y por lo tanto muy simplificado, de uno de los escenarios posibles con sus tensiones específicas. Para delinear otro escenario debemos repasar las consideraciones descritas en los primeros capítulos de este artículo. No se trata simplemente de un Uruguay “naturalmente” devastado, sino de una constelación de agentes económicos, base de una reestructuración capitalista a escala mundial, de cuño neoliberal y bajo control unipolar.

La evolución del capital transnacional –procesos de fragmentación del proceso productivo, liberalización, mercantilización, concentración y centralización del capital, etc.- ha llevado a transformaciones de los Estados nacionales a efectos de cumplir las nuevas funciones que exige la reproducción ampliada a escala mundial. A estos efectos también se han configurado nuevas instituciones y foros: la Comisión Trilateral, el Grupo de los 7, la OCDE, el Foro Económico Mundial y la Organización Mundial de Comercio. El capital transnacional ha requerido la creación de un nuevo orden institucional que regule las relaciones centro-periferia a través de herramientas –vía BM y FMI- que sirvan a los intereses inmediatos de los EE.UU. Estos elementos se complementan con otros como la presión de los medios y la reacción de los beneficiarios locales del neoliberalismo.

Semejantes condiciones del tablero global podrían reducir brutalmente los márgenes de maniobra y servir de freno o de encarriladora al empuje progresista. Es en este punto donde se bifurcaría el camino. Es aquí en donde se definiría efectivamente el tipo de relación entre el gobierno, la fuerza política y las fuerzas sociales. Por último, en ese momento preciso se tensarían las relaciones entre los distintos grupos de izquierda y se pondrían en juego la capacidad de liderazgo, la autonomía y la vigencia de las organizaciones sociales, la credibilidad política y las expectativas del campo popular en el Frente Amplio.

Esquemáticamente, este cruce de caminos significa básicamente: o el congelamiento

de las aspiraciones de las mayorías a las necesidades de acumulación o, por el contrario, la profundización de los procesos de democratización y transformación social. La izquierda uruguaya constreñida por los problemas de la coyuntura económica y atenta a responder rápidamente a la emergencia social podría perder el horizonte de salida al neoliberalismo como modelo hegemónico. In extremis, un nuevo formato de representación (Therborn, 1987) pragmático, conformista, contenedor e integrador de los impulsos populares, estabilizador de los antagonismos e inmovilista también constituiría otro escenario posible.

Obviamente la historia no transcurre en términos de alternativas lineales y polares tales como las que hemos rápidamente esbozado. En particular, la acumulación del capital no es necesariamente un juego de suma cero. En todo caso, los nuevos escenarios dependerán de luchas sociales, económicas, políticas e ideológicas concretas, locales y regionales, capaces de modificar la correlación de fuerzas y construir las nuevas posibilidades de cambio, salvando bloqueos y enderezando desviaciones.

6. CONCLUSIONES

Partiendo de un ángulo de construcción de conocimiento basado no sólo en lo constituido o lo que hoy parece únicamente como “viable” sino también en lo constituyente en tanto construcción de lo nuevo, ponderando asimismo las actuales restricciones sistémicas globales y regionales para la capacidad de construcción de alternativas sociales, se ha llegado a delimitar rápidamente algunos escenarios posibles.

En ese trayecto, se ha sostenido que las posibilidades de desarrollo social basadas en las demandas del campo popular, están reñidas con una idea de continuidad del modelo –aún matizado- que impulsan algunas agencias globales conocidas. Por el contrario, un cambio social que pueda canalizar tales demandas significa la construcción de nuevas alianzas hacia otro patrón de poder local, pero sin dudas rearticulado regional y globalmente.

No puede obviarse que la integración regional de América Latina -en sentido amplio y no solamente del capital- forma parte del proceso de construcción de alternativas. No obstante, desde el punto de vista analítico, se ha intentado separar y caracterizar el campo popular uruguayo, dando cuenta de su complejidad, pero también de los desafíos que enfrenta. En especial se ha tratado de recuperar la idea de tensión y de conflicto que inevitablemente cruza todo lo que se suele englobar como “sociedad civil”. En este sentido, se han enfatizado algunos aspectos que deben tenerse presente para el nuevo contexto abierto en el 2004 y de sus horizontes de posibilidades.

La rigurosidad en Ciencias Sociales es ajena a la futurología, pero permite proyectar algunas tendencias. Se está ante una oportunidad histórica, fundacional, pero ésta no pasa exclusivamente por el Frente Amplio. En realidad, se trata de convocar a eso que suele designarse vagamente como “masas” a la política para avivar un proyecto de transformación social. De aquí la necesidad de activación orgánica y de convergencia real de los componentes del campo popular. Más allá de la pluralidad de contornos, componentes y aspiraciones que esta expresión aglutina, un nuevo proyecto requiere una dinámica fluida con tales expresiones colectivas. Pero, ya se dijo, este no es el único escenario posible.

BIBLIOGRAFIA

Amin, Samir: “El capitalismo en la era de la globalización”, Buenos Aires, ed. Paidós, 1999.

Amin, Samir: “Los desafíos de la mundialización”, México, Siglo XXI editores / CIICH – UNAM, 1997.

Anderson, Perry: “Las antinomias de Antonio Gramsci”, en Cuadernos del Sur Nros. 6 y

- 7, Ed. Tierra del Fuego, Buenos Aires, 1987.
- Antunes, Ricardo: "¿Adios al trabajo?. Ensayo sobre las metamorfosis y el rol central del mundo del trabajo", Buenos Aires, col. Herramienta / ed. antídoto, 1999.
- Bittencourt, Gustavo y Domingo, Rosario: "El caso uruguayo" en "El boom de inversión extranjera directa en el Mercosur", Chudnovsky, Daniel (coordinador), Buenos Aires, Siglo XXI / Red Mercosur, Buenos Aires, 2001.
- Caminotti, Mariana y otros: "El capital social en el marco de las nuevas estrategias del Banco Mundial para la reducción de la pobreza", artículo contenido en revista Pensamiento Propio N° 16, Buenos Aires, Julio-Diciembre 2002.
- De Sierra, Gerónimo: "El Uruguay post dictadura. Estado, política y actores" Montevideo, Facultad de Ciencias Sociales, 1992.
- De Sierra, Gerónimo (comp.): "¿Hacia donde va el estado uruguayo?. Concentración de poder y democracia", Montevideo, FCU / CIEDUR, 1987.
- Falero, Alfredo: "La integración regional como estímulo para el desarrollo: ¿espejismo o realidad?", artículo contenido en "El Uruguay desde la Sociología II", Enrique Mazzei (comp.), Montevideo, Dpto. de Sociología – FCS, 2004.
- Falero, Alfredo: "Globalización e integración regional. Elementos para un paradigma sociológico de interpretación", Documento de Trabajo N° 72, Dpto. de Sociología, Facultad Ciencias Sociales, 2003 a.
- Falero, Alfredo: "Sociedad civil y construcción de nueva subjetividad social en Uruguay: condicionamientos, conflictos, desafíos" en "Movimientos sociales y conflicto en América Latina", José Seoane (compilador), Buenos Aires, CLACSO, 2003 b.
- Filgueira, Carlos (comp.) "Movimientos sociales en el Uruguay de hoy", Montevideo, CLACSO / CIESU / ediciones de la Banda Oriental, 1985.
- Gramsci, Antonio: "Notas sobre Maquiavelo, sobre la política y sobre el Estado moderno", Buenos Aires, Ed. Nueva Visión SAIC, 1972.
- León, Emma y Zemelman, Hugo (coords.) "Subjetividad: umbrales del pensamiento social", Barcelona, Anthropos / CRIM-UNAM, 1997.
- Olesker, Daniel: "Crecimiento y exclusión", Montevideo, ediciones Trilce, 2001.
- Putnam, R.D.: "Making democracy work: civic traditions in modern Italy", Princeton, Princeton University Press, 1993.
- Quijano, Anibal: "El fantasma del desarrollo en América Latina" trabajo contenido en "El desarrollo en la globalización. El reto de América Latina", Alberto Acosta (compilador), Caracas, ILDIS / Editorial Nueva Sociedad, 2000
- Real de Azúa, Carlos: "Uruguay ¿una sociedad amortiguadora?", Montevideo, CIESU - Banda Oriental, 1984.
- Real de Azúa, Carlos: "Política, poder y partidos en el Uruguay de hoy" en varios autores Uruguay hoy, Buenos Aires, Siglo XXI, 1971.
- Sader, Eder 1995 (1988) Quando novos personagens entraram em cena (São Paulo, editora Paz e Terra S/A).
- Sevares, Julio: "En busca de la burguesía nacional perdida", artículo contenido en Le Monde Diplomatique, Buenos Aires, diciembre 2002.
- Sousa Santos, Boaventura: "A crítica da razão indolente. Contra o desperdício da experiência", São Paulo, Cortez editora, 2000.
- Tarrow, Sydney "El poder en movimiento. Los movimientos sociales, la acción colectiva y la política", Madrid, Alianza editorial, 1994.
- Therborn, Göran: "¿Cómo domina la clase dominante?. Aparatos de Estado y poder estatal en el feudalismo, el capitalismo y el socialismo", México, Siglo XXI editores, 1987.
- Thompson, E. P.: "Miseria de la teoría", Barcelona, editorial Crítica, 1981.

Vilas, Carlos: "Actores, sujetos, movimientos: ¿dónde quedaron las clases?" en Neufeld, María Rosa et al, "Antropología Social y Política. Hegemonía y poder: el mundo en movimiento", Buenos Aires, Eudeba, 1999.

Wallerstein, Immanuel: "Conocer el mundo, saber el mundo: el fin de lo aprendido. Una ciencia social para el siglo XXI, México, Siglo XXI editores / CIICH-UNAM, 2001.

Wallerstein, Immanuel: "Impensar las Ciencias Sociales", México, Siglo XXI / CIICH – UNAM, 1998.

[1] Aunque no resulte novedoso establecerlo, no debe confundirse crecimiento económico con desarrollo que como concepto alude, aunque vagamente, a la generación y sostenimiento de mejores condiciones de calidad de vida.

[2] Para un examen sociológico de esta corriente y sus derivaciones conceptuales, véase Falero, 2003 a y 2004.

[3] Datos del año 2002, indican para el coeficiente Gini de distribución del ingreso una variación de 0.25 a 0.30 para Suecia, Dinamarca o Países Bajos entre otros contra un promedio en América Latina de 0.57.

[4] Como se sabe "sociedad amortiguadora" es la expresión utilizada por Carlos Real de Azúa (1984) para observar que la sociedad uruguaya tendía a neutralizar grandes conflictos, tesis que fue sobredimensionada por lecturas posteriores.

[5] Esto va mucho más allá de considerar a la revolución Cubana como agente desencadenante. La década es muy compleja como para admitir lecturas fáciles.

[6] El concepto de geocultura sugiere un nuevo conjunto de valores que trasciende a los estados particulares. Véase Wallerstein (2001).

[7] Recuérdese para el caso uruguayo la significación de un intento fracasado de autolegitimación militar (plebiscito de 1980) y la eclosión de la organización de sectores populares (Filgueira, 1985) especialmente a través de tres movimientos sociales importantes: sindical, estudiantil y FUCVAM,

[8] Patrón de poder regional y global constituye una separación analítica imprescindible para advertir especificidades regionales. Con ello se alude a que por ejemplo, los países del sudeste asiático no fueron sometidos a reformas estructurales como ocurrió con los países de América Latina.

[9] Cifras de Daniel Olesker, véase La República 09.06.03 (Artículo: "En el total del país casi un millón de personas tienen problemas de empleo").

[10] Nótese que las proyecciones del 2001 sobre porcentaje de niños que nacerían en situaciones de pobreza de mantenerse las mismas condiciones, se adelantaron abruptamente para pasar a aproximadamente el 60 % del total en el 2002 con la crisis.

[11] El tema estuvo presente en los importantes debates de las décadas del sesenta y setenta. Con diversos matices enfrentó a quienes se afiliaban a la perspectiva de la dependencia con quienes sostenían la posibilidad de un desarrollo nacional ya sea que su sociedad de destino fuera capitalista o socialista.

[12] Recuérdese el conocido clásico de la sociología "La ética protestante y el espíritu del capitalismo", trabajo aparecido en 1904.

[13] Véase La Jornada, México, 24 y 25 de mayo de 2003; entrevista a Jorge Castañeda, América Economía N° 270, 30.01 al 19.02 del 2004.

[14] En CARTA MAYOR, 05.04.04.

[15] Para una visión tecnocrática de capital social puede consultarse las páginas web de CEPAL, BID o BANCO MUNDIAL, sin pretender señalar con esto que los tres organismos tengan la misma postura en torno al tema. Para un análisis en el caso del Banco Mundial, véase Caminotti y otros, 2002.

[16] "Con-fin Solidario", Montevideo, Instituto de Comunicación y Desarrollo, 2000.

(Véase: www.icd.org.uy)

[17] Véase por ejemplo, Brecha, 12.09.03.

[18] Véase artículo de Brecha sobre Paysandú “El ocaso de la sociedad civil organizada. La hora de los políticos”, 04.12.03.

[19] “Relacionamiento Fuerza Política- Gobierno - Trabajadores y Organizaciones Sociales.” Documento aprobado en general en el Congreso Héctor Rodríguez de diciembre de 2004.

[20] No es un dato menor que el Partido Socialista, el Partido Comunista y los distintos grupos radicales, todos con apoyaturas en organizaciones populares, hayan perdido peso electoral en las elecciones de este año.

[21] Nos referimos a una larga lucha por la hegemonía a través de las complejas instituciones y organizaciones de masas que integran la sociedad civil. Véase Gramsci, 1972, y Anderson, 1987.

[PVP - Partido por la Victoria del Pueblo - Frente Amplio - Uruguay](#)